



## Consejo Económico y Social

Distr. general  
2 de enero de 2013  
Español  
Original: inglés

---

### Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

#### 48º período de sesiones

#### Acta resumida (parcial)\* de la segunda sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el lunes 30 de abril de 2012, a las 15.00 horas

*Presidente:* Sr. Pillay

### Sumario

Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

---

\* No se levantó acta resumida del resto de la sesión.

---

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

*Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.*

**Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales**

*Exposiciones de las organizaciones no gubernamentales*

1. **El Presidente** invita a los representantes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) presentes en la sesión a compartir con el Comité sus observaciones y preocupaciones relativas a los Estados partes cuyos informes periódicos serán examinados durante la sesión.

*Eslovaquia*

2. **La Sra. Westeson** (Centro de Derechos Reproductivos) dice que hay tres temas que preocupan a su organización en relación con la salud sexual y los derechos reproductivos en Eslovaquia. En primer lugar, los anticonceptivos orales y los servicios de interrupción del embarazo no se encuentran disponibles a través del sistema de salud pública, y los precios son prohibitivos para la mayoría de las mujeres. Además, las prácticas discriminatorias que ya existían se vieron exacerbadas a fines de 2011 cuando el Parlamento eslovaco dio un paso hacia atrás y excluyó expresamente la contracepción de la cobertura sanitaria por considerar que los anticonceptivos eran medicamentos de uso asociado al estilo de vida. En segundo lugar, la falta de datos estadísticos completos y exactos sobre la salud sexual y reproductiva significa que el Gobierno tiene un conocimiento insuficiente de las razones que hay detrás de la reducida utilización de anticonceptivos y el elevado número de embarazos no deseados en el país, por lo tanto se encuentra mal preparado para identificar las medidas correctivas necesarias. En tercer lugar, la educación sexual solo integra el programa escolar como parte de los estudios de biología, ética y religión, y no como una materia independiente y obligatoria. Así pues, la instrucción suele centrarse en el estudio de la anatomía y en nociones estereotipadas del matrimonio y la familia, dejando de lado la información sobre los derechos humanos y las relaciones humanas.

3. La oradora insta al Comité a preguntar a la delegación de Eslovaquia qué medidas está tomando el Gobierno para abordar los problemas mencionados.

4. **La Sra. Mazurova** (Amnistía Internacional) dice que su organización desea poner de relieve la discriminación que sufren en Eslovaquia miles de niños romaníes colocados en clases étnicamente segregadas, en las que reciben una educación inferior a la de los demás. La segregación está expresamente prohibida por la Ley contra la discriminación y la Ley de enseñanza; sin embargo, las dos instituciones encargadas de supervisar la aplicación de las disposiciones pertinentes, a saber, la Inspección Escolar Pública y el Centro Nacional de Derechos Humanos de Eslovaquia, no disponen de la autoridad suficiente para controlar su cumplimiento, ni para aplicar sanciones en caso de inobservancia. Además, la legislación eslovaca no contiene una definición específica de segregación y se observa una falta de voluntad política para resolver el problema. Su organización, pues, pide al Gobierno de Eslovaquia que refuerce las facultades y las competencias de las dos instituciones de supervisión, introduzca una obligación jurídica clara para que las escuelas ofrezcan una educación sin segregación y tome medidas para abolir esta práctica.

5. **La Sra. Tamankova** (Representante de la Comunidad Romaní de Eslovaquia) dice que su hija es uno de los numerosos niños romaníes que fueron colocados en un primer grado segregado a principios de 2011. Convencidos de que sus hijos necesitan estar integrados con niños no romaníes para poder competir eficazmente y aprender el idioma eslovaco, y de que las clases segregadas fomentan una intolerancia que persiste más allá de la infancia, los padres presentaron una queja y lanzaron una campaña para garantizar la integración de sus hijos en la escuela ordinaria. Como hasta ahora la exposición mediática

no ha logrado este objetivo, la oradora pide el apoyo del Comité en su petición a las autoridades estatales.

6. **La Sra. Debrecéniová** (Ciudadano y Democracia) dice que a su organización también le preocupa gravemente el acceso limitado a los métodos anticonceptivos y al aborto en Eslovaquia. El Gobierno no cuenta con una política global sobre los derechos sexuales y reproductivos, y es reticente a instaurarla a causa de la creciente injerencia de la jerarquía de la Iglesia Católica. Frecuentemente se cita la objeción de conciencia como motivo para denegar el acceso a los anticonceptivos y al aborto, y faltan los mecanismos de supervisión necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación existente. Por tanto, la práctica en Eslovaquia difiere considerablemente de las obligaciones jurídicas y dimanantes del Pacto que incumben al país.

7. **El Sr. Sadi** dice que el limitado objeto de las exposiciones de las ONG podría hacer pensar que la salud reproductiva y la situación de la comunidad romaní son las únicas cuestiones apremiantes en Eslovaquia, y que el Estado parte cumple con sus obligaciones en las demás esferas. Puesto que no es factible que así sea, desearía conocer qué otras cuestiones son, en opinión de las ONG, motivo de especial preocupación. También solicita información más detallada sobre el costo de los anticonceptivos y pregunta por qué se considera que la educación sexual obligatoria no debería estar combinada con otras materias.

8. El Comité es consciente de la necesidad de proteger a los romaníes contra la discriminación en toda Europa. Como, al parecer, la legislación vigente en Eslovaquia es insuficiente para lograr el cambio de actitud y de prácticas que se necesita, el orador se pregunta si tal vez sería necesario lanzar una campaña especial para crear conciencia y abordar las causas profundas.

9. **El Sr. Texier** dice que la aserción de que la evolución legislativa viene dictada por la Iglesia Católica es preocupante, y pregunta por qué, en la opinión de las ONG, el Estado no es capaz de dejar de lado las objeciones de la Iglesia y ajustar su legislación a las normas internacionales.

10. **El Sr. Kerdoun**, reiterando la preocupación del Sr. Sadi sobre el limitado objeto de las exposiciones de las ONG, pregunta por qué no se ha incluido información sobre cuestiones como los derechos de las personas con discapacidad, la desigualdad de género y los derechos de los niños.

11. **La Sra. Westeson** (Centro de Derechos Reproductivos) dice que las ONG se han centrado en las esferas en las que disponen de conocimientos especializados e información fidedigna.

12. **La Sra. Debrecéniová** (Ciudadano y Democracia) dice que las ONG no han abordado otros problemas que aquejan a la sociedad eslovaca, como la violencia doméstica, la discriminación en el mercado laboral y la desigualdad salarial, en parte debido a la falta de apoyo del Gobierno a la labor que desempeñan. Ello no refleja de ninguna manera una falta de interés o de preocupación.

13. Los anticonceptivos orales cuestan entre 7 y 15 euros por mes. Objetivamente, el monto no parece demasiado elevado, pero está claro que, resulta prohibitivo para muchas mujeres, sobre todo las mujeres de recursos limitados que viven en asentamientos romaníes o se encuentran en relaciones violentas, y las adolescentes que no pueden confiar en sus padres. Los médicos también han confirmado que, aunque haya voluntad de recetarlos, a menudo los anticonceptivos se rechazan por problemas de costo.

14. En cuanto a la educación sexual, la cuestión no es tanto que debería impartirse como materia independiente, sino que debería enfocarse desde la perspectiva de los derechos humanos y sin distorsión ideológica. A pesar de que la Constitución eslovaca estipula de

modo expreso que el Estado no debe estar vinculado a ninguna ideología o religión, la influencia de la Iglesia Católica se ha reforzado desde que el nuevo Gobierno entró en funciones en 2010. Desde entonces, las ONG ni siquiera han sido invitadas a participar en la formulación de políticas. Está claro que la Iglesia Católica tiene derecho a expresar su opinión, pero el Estado debería guiarse por los principios internacionales de derechos humanos y no por ideologías religiosas.

15. **La Sra. Baldwin-Pask** (Amnistía Internacional) dice que la orientación de su ONG refleja un programa de investigación más amplio sobre la situación de la comunidad romaní en toda Europa, y además se ajusta al programa de trabajo del Comité.

16. **El Sr. Sadi**, observando que, como miembro de la Unión Europea, Eslovaquia está sujeta a reglamentos y normas de alto nivel en materia de derechos humanos, así como a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pregunta por qué no se ha remitido ningún caso a dicho tribunal, sobre todo si, como indicó la ONG, las leyes del Estado parte en materia de segregación son deficientes.

17. **La Sra. Mazurova** (Amnistía Internacional) dice que, si bien no se han remitido casos contra Eslovaquia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este ha visto un caso similar relativo a la República Checa. Sin embargo, un Tribunal de Distrito eslovaco se pronunció contra la segregación en un caso presentado en 2011. La escuela en cuestión apeló contra la decisión y el caso se encuentra ahora ante un tribunal superior en espera de una decisión.

#### *Perú*

18. **La Sra. Finer** (Centro de Derechos Reproductivos) dice que preocupa a su organización que el Perú aún no haya adoptado un protocolo que garantice a las mujeres un acceso no discriminatorio a servicios de salud reproductiva legales, como el aborto terapéutico, de conformidad con el Pacto. Las graves consecuencias de esta falta de acceso quedaron de manifiesto en dos casos individuales examinados por el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (*K. L. c. el Perú*, CCPR/C/85/D/1153/2003, y *L. C. c. el Perú*, CEDAW/C/50/D/22/2009, respectivamente), que suscitaron la formulación de recomendaciones al Estado parte para que estableciera un mecanismo que velara por el acceso efectivo a un aborto terapéutico que hubiera podido aliviar el sufrimiento de las víctimas en los casos mencionados. No solo sigue faltando ese mecanismo, sino que la preocupación de su organización ha aumentado debido a los indicios de que el protocolo objeto de debate podría, una vez establecido, introducir un requisito de procedimiento para que las mujeres que abortan comparezcan ante un comité de ética del hospital o ante un consejo médico. La oradora insta al Comité a solicitar una explicación que justifique el retraso del Estado parte en el cumplimiento de las recomendaciones mencionadas, y a exhortar al Estado parte a adoptar un protocolo nacional para el aborto terapéutico que no imponga barreras adicionales al acceso a un servicio legal y de indicación médica.

19. **La Sra. Ramírez** (PROMSEX – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos) dice que desea llamar la atención sobre las barreras que obstaculizan el acceso de las y los adolescentes a los servicios públicos de salud sexual y reproductiva. La primera barrera proviene de una enmienda de 2006 al Código Penal peruano según la cual todas las relaciones sexuales entre o con adolescentes entre 14 y 18 años son automáticamente delito de violación, sin que se evalúe si hubo consentimiento o no. Las repercusiones negativas de esta enmienda, reconocidas en un informe del Ministerio de Salud publicado en 2009, son el aumento de la fecundidad en las adolescentes, el mayor riesgo de exposición a infecciones de transmisión sexual y el incremento de la mortalidad materna adolescente. En 2010 se presentó un proyecto de ley ante el parlamento para cambiar la norma, pero se retiró unos meses más tarde. La segunda

barrera está relacionada con el artículo 4 de la Ley general de salud, que estipula que ninguna persona menor de edad puede ser sometida a un tratamiento médico sin el consentimiento previo de su representante legal. Esta disposición se ha interpretado como si indicara que los adolescentes deben estar acompañados por sus padres para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva.

20. A la luz de estas barreras, su organización solicita al Comité que considere la posibilidad de pedir al Estado parte que facilite el acceso a los métodos anticonceptivos y a los servicios de salud reproductiva, y que priorice medidas encaminadas a reducir los embarazos en adolescentes y la mortalidad materna adolescente, especialmente altas en las zonas rurales y las regiones de la Selva del Perú.

21. **La Sra. Cedano** (DEMUS – Movimiento para la Defensa de los Derechos de las Mujeres) dice que su organización desea que el Comité aborde la cuestión de la esterilización forzada con la delegación del Perú. Los estudios documentan que alrededor de 290.000 hombres y mujeres, la mayoría provenientes de entornos desfavorecidos, fueron objeto de esterilizaciones forzadas durante el Gobierno de Alberto Fujimori en aplicación de políticas encaminadas a limitar el crecimiento demográfico. Como consecuencia de estos actos fallecieron por lo menos 17 mujeres. En 2002 se inició una investigación en torno a estos fallecimientos y a otros 2.000 casos que hicieron que el Estado reconociera su deber de brindar reparaciones a las víctimas y sancionar a los autores, pero en 2010 todo quedó archivado con el argumento de que la acción penal habría prescrito.

22. En 2011 las persistentes peticiones recibidas lograron reabrir la investigación pero la organización de la oradora teme que la Fiscalía no cuente con recursos suficientes para asegurar un estudio minucioso de cada caso. Mientras tanto, se sigue negando a las víctimas la reparación merecida. La oradora insta al Comité a recomendar al Estado parte que destine los recursos suficientes para garantizar una investigación sin dilaciones y que adopte una política nacional de reparaciones integrales a las víctimas.

23. **La Sra. Casas** (Planned Parenthood) dice que desea destacar las repercusiones negativas de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en 2009 por la que frenó un programa del Ministerio de Salud encaminado a distribuir gratuitamente a nivel nacional la anticoncepción de emergencia, con el argumento de que la píldora del día siguiente tenía efectos abortivos más que anticonceptivos. A pesar de que el Ministerio de Salud ha intentado restablecer el programa, basado en pruebas científicas recientes que confirman la ausencia de efectos secundarios dañinos, a las mujeres se les sigue denegando el acceso a la anticoncepción de emergencia a través de los servicios de salud pública; incluso si han sido víctimas de violencia sexual. La oradora solicita al Comité que inste al Gobierno del Perú a estudiar la información científica oficial sobre los efectos de la anticoncepción de emergencia y, sobre la base de estos datos, a reanudar la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.

24. **La Sra. Raico** (Movimiento Manuela Ramos) dice que su organización está preocupada por el elevado número de actos de violencia sexual perpetrados en el Perú. Según las estadísticas, alrededor de un 12% de las mujeres peruanas han sido obligadas a tener relaciones sexuales no consentidas por lo menos una vez en su vida, con un 5% de embarazos no deseados como resultado: una cifra que equivale a unos 35.000 embarazos al año. A la ya difícil situación de las víctimas se suma la restrictiva legislación del país, que limita el acceso a la anticoncepción de emergencia y al aborto. Como desde hace dos años se espera una decisión relativa a una ley sobre la despenalización del aborto en casos de violación, sometida al Congreso en 2009, y su adopción no es para nada segura, la Sra. Raico sugiere al Comité que inste al Gobierno del Perú a priorizar y acelerar las enmiendas legislativas necesarias para garantizar el acceso a un aborto seguro y legal a las mujeres víctimas de la violencia sexual.

25. **La Sra. Rasmussen** (Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura) dice que en el Perú las víctimas de tortura y de malos tratos disponen de un acceso muy limitado a servicios de atención y rehabilitación administrados a tiempo. Como consecuencia de ello, sufren a menudo de problemas de salud crónicos que repercuten negativamente en otros aspectos de sus vidas, como el pobre rendimiento en la educación o en el trabajo, que a su vez exacerbaban su sufrimiento y pobreza. Puesto que, al no ofrecer servicios de apoyo y atención adecuados a las víctimas el Estado parte les niega numerosos derechos garantizados por el Pacto, la oradora sugiere que, en sus recomendaciones, el Comité pida al país que subsane estas deficiencias.

26. **La Sra. Suárez Franco** (FIAN International) dice que su organización desea proponer tres esferas de debate durante el diálogo con el Estado parte. En primer lugar, se trata de la pobreza y la desnutrición. Si bien durante los últimos diez años el país ha mantenido un crecimiento económico continuo y la pobreza en general ha disminuido, aún existen importantes brechas entre las áreas rurales y urbanas. La distribución desigual del ingreso se ve reflejada en las tasas de desnutrición crónica más elevadas entre los niños de zonas rurales o de origen indígena. La segunda esfera de preocupación es la actividad minera y la explotación de hidrocarburos, percibidas como una amenaza al sustento, la autosuficiencia y el bienestar de las comunidades rurales. Se promulgó una ley de consulta previa en respuesta a la triplicación de la cantidad de conflictos relacionados con el desarrollo industrial en los últimos años, pero sin grandes resultados. La tercera esfera de preocupación es la falta de un marco jurídico para garantizar el derecho a la alimentación.

27. La oradora pide al Comité que inste al Estado parte a abordar estos problemas. En particular, desea saber cómo tiene previsto el Estado parte asegurar la igualdad de acceso a una alimentación adecuada en todas las comunidades, proteger a las comunidades rurales de los efectos negativos de la minería y la explotación de hidrocarburos, velar por que las comunidades gocen del derecho a consulta previa y establecer el marco jurídico necesario para garantizar el derecho a la alimentación.

28. **El Sr. López** (Comisión Internacional de Juristas) dice que los efectos de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios (Nº 29785) y de los reglamentos de ejecución recientemente aprobados se han visto menoscabados por el Gobierno. Varios de los artículos de la Ley habían sido impugnados por infringir el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1989 (Nº 169), que el Perú ratificó en 1994. Al amparo de la Ley, una serie de concesiones mineras otorgadas entre 1995 y 2011, en violación del Convenio Nº 169 de la OIT, obtuvieron autorización para continuar. Además, solamente seis organizaciones nacionales de pueblos indígenas fueron invitadas a tomar parte en las consultas sobre la elaboración de los reglamentos de ejecución de la Ley, y se dejó de lado a una serie de grupos regionales. Posteriormente, cuatro de las organizaciones nacionales de pueblos indígenas se retiraron de las consultas. El proyecto minero de Conga, en el norte del Perú, dejó a la ciudad de Cajamarca, que nunca antes había sufrido de escasez de agua, con un acceso limitado a un agua que había quedado contaminada como resultado de las actividades mineras.

29. La independencia del Tribunal Constitucional del Perú se ha visto comprometida por el nombramiento, en 2008, de cuatro candidatos políticos como jueces en el Tribunal, y la retención de otros dos jueces cuyos mandatos habían expirado. La tendencia del Tribunal, en los últimos años de desestimar las denuncias como inadmisibles antes de estudiarlas en cuanto al fondo, y la creciente incoherencia de sus fallos, incluidos en controvertidos casos de violaciones a los derechos humanos, han debilitado aún más la credibilidad del Tribunal.

30. **La Sra. Shin Heisoo**, observando que se ha elevado la edad relativa a la violación de menores de 14 a 18 años, lamenta que aún no se haya despenalizado el aborto en los

casos de violación. Desearía recibir ejemplos más específicos de fallos del Tribunal Constitucional del Perú incompatibles con las disposiciones del Pacto.

31. **El Sr. López** (Comisión Internacional de Juristas) dice que más del 60% de las denuncias presentadas ante el Tribunal Constitucional entre 2007 y 2012 han sido declaradas inadmisibles. Por ejemplo, el Tribunal desestimó la impugnación de dos leyes, una sobre recursos hídricos y la otra sobre recursos naturales, que contenían disposiciones incompatibles con el Pacto, citando que no había pruebas de que las comunidades indígenas se verían afectadas por estas leyes.

32. **La Sra. Ramírez** (PROMSEX) dice que, en 2006, el Tribunal Constitucional decretó, en consonancia con las opiniones manifestadas por la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Médica del Perú, que la píldora del día siguiente era un anticonceptivo. Tres años más tarde, sin razón aparente, revocó esta decisión y declaró que era abortiva.

33. **El Sr. Riedel** dice que las alegaciones formuladas por las ONG que cuestionan la independencia de la judicatura del Perú resultan preocupantes, pero deben ser corroboradas por más hechos concretos.

34. **El Sr. Texier** pregunta si se dispone de documentos que ilustren las repercusiones negativas de las actividades mineras llevadas a cabo por las empresas multinacionales en los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas.

35. **La Sra. Suárez Franco** (FIAN International) dice que la información disponible proviene de las consultas celebradas con las comunidades afectadas, pero se ha previsto recopilar más detalles de grupos de la sociedad civil, que luego se enviarán al Comité.

#### *España*

36. **El Presidente** señala a la atención del Comité que las ONG españolas no pudieron asistir a la sesión.

37. **El Sr. Marchán Romero** dice que el Center for Economic and Social Rights, una coalición de ONG españolas, facilitó un extenso informe con un resumen ejecutivo en inglés que fue publicado en la página web del Comité.

38. **La Sra. Shin** Heisoo dice que la ausencia de algunas ONG durante las sesiones del Comité puede deberse a la falta de recursos y propone que su participación sea objeto de debate más adelante en la sesión.

#### *Etiopía*

39. **El Sr. Hodenfield** (CIVICUS) dice que los agricultores y los pastores en Etiopía no tienen derecho a vender, intercambiar o hipotecar tierras que se encuentran bajo el control exclusivo del Gobierno. Desde 2005, se han arrendado 3,5 millones de hectáreas de tierra a inversores extranjeros o nacionales, y se prevé la duplicación de esta cifra para 2015. Contrariamente a las afirmaciones del Gobierno, buena parte de las tierras en cuestión estaban ocupadas por agricultores o pastores, miles de personas que, según algunos informes, fueron desalojadas por la fuerza sin ningún tipo de compensación ni parcelas de sustitución. Los inversores no tenían ninguna obligación de participar a las necesidades de seguridad alimentaria del país, prestar servicios sociales o invertir en infraestructura. El Gobierno debería mejorar la seguridad de la tenencia de la tierra, proteger a los pequeños terratenientes y a los pastores del traslado, y proporcionar una indemnización adecuada y servicios sociales en casos de expropiación.

40. **El Sr. Abdullahi** (African Rights Monitor) dice que los grupos étnicos de las regiones de Oromia y Ogaden en Etiopía son víctimas de abusos y cuentan con un acceso

limitado a los servicios jurídicos, educativos y sanitarios. El Gobierno persigue a la población en Ogaden a causa de su etnia, su identidad y su religión. En 2007, una Misión de evaluación de la situación humanitaria de las Naciones Unidas observó que el Gobierno se encontraba en guerra económica contra sus residentes. Las mujeres y los niños de ambas zonas son especialmente vulnerables a la trata y a los abusos sexuales y, en su informe combinado (E/C.12/ETH/1-3), el Estado parte se ha negado a reconocer que en esas regiones se vive una calamitosa crisis humanitaria. Los servicios de salud son prácticamente inexistentes en ambas áreas, que además han sido minadas por el ejército etíope, y la tasa de analfabetismo de Ogaden, del 80%, es la más elevada del país.

41. **El Sr. Schrijver** dice que desearía saber más acerca de las empresas que invierten en tierras en Etiopía, y si son de propiedad extranjera.

42. **El Sr. Sadi** dice que sería útil contar con información más específica sobre cuáles son las tierras afectadas por las expropiaciones en Etiopía, y si pertenecían a los pastores afectados. De igual manera, se necesita más información sobre quiénes eran los propietarios de las tierras que se vendieron a inversores en el Perú.

43. **La Sra. Cong Jun** dice que desearía saber si la mano de obra local trabaja en las tierras agrícolas arrendadas a extranjeros en Etiopía.

44. **El Sr. Hodenfield (CIVICUS)** dice que en Etiopía el Estado es el único responsable de la distribución equitativa de las tierras. La falta de indemnización a las víctimas por la expropiación equivale a un ataque contra su derecho a la alimentación. China, Alemania, Israel y la Arabia Saudita son las principales fuentes de inversión en tierras etíopes, que se utilizan principalmente para producir biocombustibles y alimentos para sus mercados nacionales. Se alienta a estos extranjeros a exportar sus cosechas y, además, se les arriendan las tierras por precios más bajos que a los ciudadanos etíopes. Solamente un reducido número de habitantes locales mal remunerados trabajan en estas tierras, tras haber sido desposeídos de ellas, en parte porque se utilizan métodos de cultivo modernos y mecanizados.

#### *Debate general*

45. **La Sra. Winter (FIAN International)** dice que la transferencia de millones de hectáreas de campesinos a corporaciones en todo el mundo afecta directamente a la seguridad alimentaria de las comunidades marginales. Los Estados que eligen entregar las tierras disponibles a los inversores en lugar de proporcionarlas a estas comunidades no cumplen con su obligación de atender a estos grupos desfavorecidos. La adquisición de tierras en gran escala conduce a una producción agrícola cada vez más mecanizada que resulta insostenible y provoca el desplazamiento de los productores locales. La expansión de los monocultivos comerciales es perjudicial para la producción local y aumenta la dependencia de la importación de alimentos. El Comité debería considerar la posibilidad de publicar una observación general sobre la tierra; apoyar las recomendaciones formuladas en el Estudio definitivo del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de los derechos de los agricultores y de otras personas que trabajan en zonas rurales; examinar la repercusión del impacto del acaparamiento de tierras durante sus diálogos con los Estados partes; y aplicar los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los Estados en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales a los casos de acaparamiento de tierras denunciados durante el proceso de vigilancia.

46. **El Sr. Sadi** dice que la cuestión de la tierra es demasiado amplia para que se aborde en un debate general.

47. **El Sr. Texier** dice que el Comité necesita información más detallada y específica a cada Estado sobre el acaparamiento de tierras para abordar esta cuestión al examinar los



informes periódicos de los Estados partes. Insta a los grupos de la sociedad civil a aunar recursos para elaborar informes paralelos completos que aborden todas las disposiciones del Pacto, en lugar de concentrarse en temas individuales como la salud sexual y reproductiva. El tema de la tortura no entra en el ámbito de competencia del Pacto.

48. **El Sr. Riedel**, observando que el Comité podrá examinar comunicaciones individuales una vez que haya entrado en vigor el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, insta a las ONG a proporcionar información amplia y recomendaciones específicas a fin de ayudar al Comité a encarar más eficazmente el aumento de la carga de trabajo.

49. **La Sra. Suárez Franco** (FIAN International) dice que alentaría al Comité a organizar una reunión sobre el acaparamiento de tierras y sus efectos en los derechos económicos, sociales y culturales. También sería de utilidad una sesión informativa sobre las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Por regla general, la tierra en cuestión pertenece al Estado y desde siempre ha sido trabajada por campesinos sin tierra. Como propietario, el Estado puede simplemente desalojar a los campesinos sin consulta previa, con la promesa de una indemnización rara vez cumplida. En otros casos, se ejerce presión sobre los propietarios de pequeñas explotaciones para que vendan sus propiedades a los grandes inversores.

50. El concepto del derecho a la tierra está estrechamente vinculado con el derecho a la alimentación y a la dignidad humana. De la misma manera en que un Estado tiene la obligación de crear las condiciones propicias para lograr el derecho al trabajo, también es responsable de crear condiciones que garanticen el derecho a la alimentación y a la dignidad humana.

51. Los propietarios expropiados que continúan trabajando la tierra que han perdido son considerados desplazados económicos o *in situ*. En general, sus condiciones de trabajo son pobres y ya no tienen la capacidad de decidir sobre la manera de producir sus propios alimentos.

52. **El Sr. Kjaerum** (Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura) dice que la disposición sobre la rehabilitación de las víctimas de la tortura es un tema de atención de salud, y por lo tanto concierne directamente al Comité.

53. **La Sra. Ramírez** (PROMSEX) dice que en los informes periódicos combinados del Perú no se hizo referencia a la salud sexual o reproductiva, excepto por la mortalidad materna.

54. **La Sra. Jourdan** (Association of World Citizens) dice que el Comité debería destacar la necesidad de la igualdad en el acceso a la atención de salud en todos los Estados.

*El debate abarcado por el acta concluye a las 17.30 horas.*